



RESOLUCION ADMINISTRATIVA ANH N° 1508/2012
La Paz, 20 de Junio de 2012

VISTOS:

El Auto de Formulación de Cargo fecha 21 de marzo de 2011 (en adelante el **Auto de Cargo**) emitido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (en adelante la **ANH**), los antecedentes del procedimiento administrativo sancionador de cargo; las normas jurídicas, legales, administrativas, sectoriales, regulatorias y sus reglamentos vigentes y aplicables, y:

CONSIDERANDO:

Que, los Informes Técnicos REGC 504/2009 de 20 de agosto de 2010 (en adelante el **Informe**), cuyo contenido reproduce las observaciones consignadas en el Protocolo de Verificación Volumétrica en Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos PVV EESS N° 003153 de fecha 23 de julio de 2010 (en adelante el **Protocolo**), indica que del control a la distribución y comercialización realizada a la Empresa Estación de Servicio de Combustibles Líquidos "Isabel Chávez" (en adelante la **Estación**) ubicada en el Km. 09 de la carretera a Santa Cruz del departamento de Cochabamba, se evidencio que su Cisterna procedía a descargar diesel oíl al tanque de almacenamiento sin contar con un extintor.

Que, ante la existencia de indicios de contravención al ordenamiento jurídico regulatorio, la ANH amparada en lo dispuesto por el parágrafo I) del Art. 77 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, mediante Auto de Cargo, formuló el cargo respectivo contra la Estación por ser presunta responsable de no operar el sistema de acuerdo a las normas y dispositivos de seguridad, conducta contravencional que se encuentra prevista y sancionada por el inciso b) del Artículo 68 del Reglamento para la Construcción y Operación de Estaciones de servicio de Combustibles Líquidos aprobado mediante Decreto Supremo No. 24721 de 23 de julio de 1997 (en adelante el **Reglamento**).

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el parágrafo II) del Art. 77 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, mediante diligencia de fecha 11 de abril de 2011 se notificó a la Estación con el Auto de Cargo, misma que se apersono y contesto el cargo formulado, señalando los siguientes argumentos relevantes:

- a) El no haber firmado el protocolo tal como prevé el Art. 62 del Reglamento, evidencia que no fue llenado y menos entregado a la Estación viciando de nulidad los supuestos cargos al no existir documento que pruebe las supuestas irregularidades de conformidad con la jurisprudencia sentada en la RA SSDH N° 0203/2004 de 05/03/2004.
- b) El auto de cargo no cumple con lo previsto en el inciso b), e) y d) del art. 28 de la Ley N° 2341, o sea no identifica claramente los hechos y antecedentes que sirven de causa y menos fundamenta las razones concretas para emitir el acto, imposibilitando ejercer el derecho a la defensa y violando los principios administrativos, al no existir el Protocolo y desconocer también el Informe.
- c) La notificación con el Auto de Cargo no se ha corrido dentro los cinco días que prevé el procedimiento administrativo, violando los derechos fundamentales establecidos en la misma noma y demás artículos concordantes, parámetros en virtud a los cuales solicita declare nulo el acto administrativo por vicios de procedimiento e improbados los cargos, retro trayendo los efectos de la nulidad al momento de la entrega del acta de inspección.

Que, de conformidad con lo normado en el Art. 78 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003 y con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa y el principio del debido proceso, mediante Auto de fecha 27 de abril de 2011, la ANH dispone la Apertura del Termino Probatorio de 20 días hábiles administrativos, Auto que fue notificado a la Estación mediante cedula en fecha 19 de mayo de 2011.



Que, mediante diligencia de fecha 14 de junio de 2011, se notifica a la Estación con el Auto de fecha 01 de junio de 2011 a través del cual se declara la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo que constituyó la diligencia de notificación con el Auto de Cargo, al no haberse adjuntado a éste los antecedentes que lo sustentan, como son el Protocolo y el Informe.

Que, en fecha 01 de junio de 2011 se emite un nuevo Auto de Cargo con el que se notifica más los antecedentes a la Estación en fecha 14 de junio de 2011, misma que responde señalando los siguientes argumentos de relevancia:

- a) El que haya firmado el protocolo una persona que no es la apoderada legal de la Estación, viola el Art. 62 del Reglamento y vicia de nulidad el cargo ya que no existe documento legal alguno que pruebe la existencia de las supuestas irregularidades detectadas a tiempo de realizarse la inspección, debiendo retrotraerse acciones al momento de la entrega del Protocolo ya que lo contrario dejaría a la Estación en un estado de indefensión absoluta al incumplir el inciso b) y e) del Art. 28 de la Ley N° 2341 y los principios administrativos que la misma prevé, es decir, al aceptar una representación legal inexistente.
- b) La notificación con el Auto de Cargo no se ha corrido dentro los cinco días que prevé el procedimiento administrativo, violando los derechos fundamentales establecidos en la misma noma y demás artículos concordantes, parámetros en virtud a los cuales solicita declare nulo el acto administrativo por vicios de procedimiento e improbados los cargos, retro trayendo los efectos de la nulidad al momento de la entrega del acta de inspección.

Que, nuevamente al amparo de lo establecido en el Art. 78 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003 y en garantía del derecho a la defensa y el principio del debido proceso, en fecha 24 de agosto de 2011 la ANH emite el Auto de Apertura Probatoria con el que se notificó a la Estación mediante cédula en fecha 07 de septiembre de 2011.

Que, finalmente mediante Auto de fecha 14 de mayo de 2011 la ANH decreta la Clausura del Término de Prueba, de conformidad con lo normado en el Art. 79 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, misma con la que se notifica a la Estación mediante diligencia de fecha 23 de mayo de 2012.

CONSIDERANDO:

Que, en cuanto al derecho vigente y aplicable que fundamenta el presente acto administrativo, el inciso a) del Art. 25 de la Ley No. 3058 de 17 de mayo de 2005, concordante con el Art. 1 y los incisos a), d), g), h) y k) del Art. 10 de la Ley No. 1600 de 28 de octubre de 1994 y con la parte in fine del Art. 2 y 5 del Reglamento, establece que la ANH cuenta con las atribuciones - entre otras-, de cumplir y hacer cumplir las normas legales sectoriales regulatorias y sus reglamentos, vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las empresas reguladas, proteger los derechos de los consumidores, conocer y procesar las denuncias y reclamos presentados respecto a actividades bajo jurisdicción del Sistema de Regulación Sectorial y aplicar sanciones en los casos previstos por las normas legales sectoriales.

Que, en correspondencia con el principio de sometimiento pleno a la ley que rigen los actos de la administración pública, asegurando a los administrados el debido proceso y el derecho a la defensa, la sustanciación del presente proceso se encuentra sujeta al procedimiento legalmente establecido en el Capítulo III del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, gozando en consecuencia de plena validez legal.

Que, en aplicación de lo establecido en los Artículo 82 y 83 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, corresponde efectuar una correcta relación de los hechos expuestos y sustentados en las etapas de iniciación y tramitación del presente proceso administrativo sancionador de cargo y en consecuencia una correcta compulsas de las pruebas de cargo y descargo que cursaren dentro del presente proceso administrativo sancionador, de conformidad a la regla de la sana crítica o valoración prudente y razonada de la prueba.



g

CONSIDERANDO:

Que, consiguientemente, en aplicación del principio de verdad material establecido en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 23 de abril de 2002, la administración pública tiene como obligación, el de recurrir a todos los medios necesarios que permitan obtener la verdad material de cómo acontecieron los hechos, así como, considerar y valorar toda prueba que permita profundizar la investigación, es decir, aquella que resulte totalmente vinculante a determinar la existencia o no de la infracción y que haga o infiera en el fondo del proceso, pudiendo descartar o apartarse de aquella que resulte ajena a lo que se pretende evidenciar.

Que, en ese sentido, el acto administrativo que resuelva el presente proceso administrativo debe considerar además de los antecedentes, los hechos facticos que se adecuan a la infracción y/o contravención administrativa, en esa línea aplicando el principio de oficialidad de la prueba, la doctrina es uniforme al establecer que la verdad material: *"es aquella que busca en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la acepción latina del término veritas: lo exacto, lo riguroso. No permite contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales, el momento del dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el más aproximado a los hechos que dieron origen al procedimiento"* (Abelaztury, Cilurzo, Curso de Procedimiento Administrativo Abeledo – Perrot, pág. 29)

Que, la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 señala en su Artículo 47 (Prueba).- *"1) Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho."* Al respecto Agustín Gordillo en su libro Tratado de Derecho Administrativo, señala: *"27) Prueba documental.- En materia de cuáles documentos habrán de ser admisibles, la regla debe formularse con la máxima amplitud y es por ello que pueden presentarse documento públicos o privados (...)".* Pág. VI – 38.

Que, el Dr. Gonzalo Castellanos Trigo en su libro Tramitación Básica del Proceso Civil, páginas: 408 y 409, señala: *"2) Clases de documentos públicos.- (...) los documentos más sobresalientes e importantes que son manejados en nuestra economía jurídica: (...) y en general todos documentos otorgados por funcionarios públicos, ya se trate de funcionarios del poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 3) Fuerza probatoria de los documentos públicos.- (...) Los documentos públicos, se traten de escrituras públicas y otros instrumentos emanados de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, gozan de un valor probatorio pleno y erga omnes, como consecuencia de la fe pública que la ley les otorga, mientras no se pruebe lo contrario o sean impugnados en forma legal, (...)"*

Que, respecto a la presunta infracción cometida por la Estación, tipificada en el inciso b) del Artículo 68 del Reglamento, la ANH produce prueba documental consistente en el Informe y el Protocolo, mismos que por la fuerza probatoria que la legislación nacional y comparada les otorga en su la calidad de documentos públicos, gozan de total validez y legitimidad por estar sometidos plenamente a la Ley, de acuerdo a lo establecido en el Art. 27 y 32 de la Ley N° 2341 23 de abril de 2002 concordante con el Artículo 48 del Decreto supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003, y contra los cuales la Estación tenía la carga de probar que los hechos expresados en éstos no fueron descritos como realmente ocurrieron, es decir que si contaba con un extintor en su cisterna a momento de realizar la descarga de diesel oil al tanque de almacenamiento de la Estación.

Que, bajo ese marco normativo, dentro el presente procedimiento la Estación ha gozado de un debido proceso, pues no ha tenido limitación alguna en cuanto al derecho a su defensa, contando con la posibilidad de asumir la misma a través de cualquier medio de prueba admisible en derecho, que se encuentre direccionada y le permita desvirtuar la presunta infracción por la cual se le formulo cargo, de ahí que al investigar la administración la verdad material en oposición de la verdad formal, es decir, al apreciar en forma objetiva, la verdad de cómo se han suscitado los hechos que se expresan en los documentos, a momento de valorar la prueba de descargo, se evidencia y concluye que:



d

- a) La existencia de un documento legal que evidencie la observación verificada por el técnico a momento de realizar la inspección a la Estación, resulta ser el Protocolo de Verificación Volumétrica en Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos PVV EESS N° 003153 de fecha 23 de julio de 2010 cursante a fs. 1, mismo que goza de total validez y legitimidad en su calidad de documento público sometido plenamente a la Ley y de fuerza probatoria otorgada por la legislación nacional y comparada y que identifica claramente los hechos y antecedentes que sirven de causa y fundamenta las razones concretas para que se haya emitido el acto consistente en la formulación del cargo.
- b) Consiguientemente, no se puede aludir su inexistencia bajo el argumento de que éste Protocolo no fue entregado a la Estación o en su caso a una persona que no resulta ser la representante o apoderada legal de la misma, menos aún, considerando que de la revisión de los antecedentes, se evidencia que el Protocolo que cursa a fs. 1 cuenta en su parte inferior derecha con el sello de la Estación en señal de recepción, sello que resulta ser el mismo que cursa en las diligencias de notificación entregadas a la Estación y que cursan a fs. 7 y 16 de obrados.
- c) En consecuencia, no se ha operado ningún vicio de nulidad considerando que a fin de que la Estación pueda hacer uso de su legítimo derecho a la defensa, se anulo obrados hasta la notificación a la Estación con el Auto de Cargo y se emitió un nuevo Auto de Cargo junto al cual se le entrego los documentos que sustentan su formulación, es decir, el Informe y el Protocolo que hace parte integrante del primero, en cumplimiento de lo señalado por el Art. 20 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003 y menos aún considerando que dicho acto administrativo si bien era válido sólo adquirió eficacia a momento de su conocimiento por parte de la Estación no causándole en consecuencia, indefensión alguna.
- d) El objeto del presente caso de autos en concordancia con el principio de la búsqueda de la verdad material, hace al hecho de verificar si la Estación operó o no el sistema en base a las normas de seguridad a momento de realizar la descarga de diesel oíl a su tanque de abastecimiento de modo tal que no haya actuado en desmedro del bien jurídico que la ANH tiene como obligación proteger y tutelar, mismo que radica en la seguridad de la población en general a momento de que ésta acuda a suministrarse de combustibles.
- e) Es decir, que el resto de los argumentos que la Estación manifiesta resultan irrelevantes para el análisis, el fondo y la resolución del presente caso de autos, toda vez que no se encuentran dirigidos a desvirtuar el que los hechos –tal y como se describen en el Protocolo y el Informe-, se hayan realizado de esa manera y no de otra, o que lo contrario se haya debido a un caso fortuito o de fuerza mayor, involuntario y no atribuible a la Estación, más aun considerando que dicha presunta infracción o incumplimiento a una de sus obligaciones y responsabilidades -que hace a la naturaleza y esencia de la actividad que ejerce y que constituye un servicio público-, radica en ejecutar todos y cada uno de los parámetros normativos de seguridad en pro de evitar cualquier aspecto que signifique peligro y riesgo a los derechos de los consumidores final y el interés colectivo.

Que, las consideraciones citadas precedentemente, tiene como fuente la valoración prudente y razonada de la prueba o el principio de la sana crítica, entendido como una acumulación de lógica y experiencia, por lo que la autoridad administrativa valorará la prueba a partir de su propia experiencia (considerando los hechos y el derecho) en relación a la reiteración de algunos hechos, pero también utilizando la lógica que nos permite construir ciertas decisiones y silogismos para obtener como resultado una decisión fundada precisamente en la lógica y experiencia jurídica (los hechos y el derecho).

Que, en este entendido, el Tratadista Allan R. Brewé Carias, en su obra "*La Carga de la Prueba en el Derecho Administrativo*" indica que la labor de la administración, en el procedimiento sancionador está regida por reglas diferentes a la jurisdiccional puesto que no es un juez, ni sus decisiones son jurisdiccionales menos dirime un conflicto de intereses contrapuestos, sino simplemente otorga una solicitud o sanciona una infracción, por tal motivo la administración está



obligada a sancionar o no una infracción y puede fundar su decisión en razones de *hecho o de derecho* diferentes a la invocadas por las partes interesadas.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 18 del Reglamento, dispone que: *“Los cisternas de transporte de combustibles líquidos desde plantas de almacenaje hasta las estaciones de servicio deberán cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas en los anexos 4 y 5”.*

Que, el punto 2.2 del Anexo No. 5 del Reglamento, establece que: *“Se conectara la pinza de descarga de electricidad estática a la toma de puesta a tierra y el camionero colocara luego los carteles de previsión, que llevara consigo el camión con los textos Peligro inflamable y prohibido Fumar, y sacara de sus soportes los extintores o matafuegos que lleve el camión, de forma de prever cualquier situación de emergencia”.*

Que, el Art. 47 del Reglamento, señala que son obligaciones de las empresas: *“Acatar las normas de seguridad (...), contenidas en los reglamentos específicos y las instrucciones y disposiciones emitidas por la Superintendencia”.*

Que, el Art. 68 del Reglamento, determina que: *“La Superintendencia sancionara a la Empresa con una multa equivalente a un día de comisión, calculada sobre el volumen comercializado en el último mes, en los siguientes casos: (...) b) Cuando el personal de la empresa no esté operando el sistema de acuerdo a normas de seguridad (...) En caso de reincidencia se sancionara con una multa equivalente a dos días de comisión, y en caso de una segunda reincidencia, se procederá a la cancelación de la Licencia de Operación, si ambas reincidencias ocurriesen en el transcurso de un año calendario computado a partir de la fecha en que se impuso la primera sanción”.*

Que, de los artículos señalados precedentemente, se infiere que la Estación no sólo está obligada a cumplir las normas que se refieren a la reglamentación de sus actividades, sino también a aquellas que direccionan sus actos, en pro del resguardo a los derechos y la seguridad de los consumidores finales y a evitar riesgos que afecten a la población en general.

CONSIDERANDO:

Que, de lo dispuesto en los incisos b) y e) del Artículo 28 y el párrafo l) del Artículo 51 y 52 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 y el párrafo l) del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, se colige que todo procedimiento administrativo deberá necesariamente terminar o concluir con la emisión de una resolución administrativa dictada por el órgano administrativo competente, salvando los recursos establecidos por Ley, y pronunciarse en forma escrita y fundamentada en los hechos y el derecho, decidiendo de manera expresa y precisa las cuestiones planteadas y fundamentada en cuanto a su objeto en los hechos, las pruebas y las razones de derecho que le dan sustento.

Que, la decisión que adopte un órgano de la administración pública, debe implicar, entre otros, el cumplimiento de los principios de verdad material y oficialidad de la prueba, el respeto al principio de contradicción de las partes en el proceso, además debe ser congruente con los hechos y antecedentes que le sirven de causa y emitirse con la debida fundamentación, como una garantía contra la arbitrariedad, puesto que una resolución sin motivación priva a las partes de la facultad de fiscalizar la reflexión del juzgador.

Que, en virtud al principio de responsabilidad previsto en el párrafo l) del Artículo 78 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, que orienta e inspira al procedimiento sancionador, sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa, las personas individuales o colectivas que resulten responsables.

Que, al no presentar la Estación la prueba de descargo suficiente que desvirtúe el cargo formulado, hace que la misma haya adecuado su conducta a lo previsto en el inciso b) del Art. 68 del Reglamento, correspondiendo entonces de conformidad a lo establecido en el Artículo 80

del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, pronunciar resolución administrativa declarando probada la comisión de la infracción tipificada en dicha norma, debiéndose imponer al responsable (la Estación), la sanción respectiva.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso b) del párrafo II) del Artículo 80 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, en la misma resolución que se declare probada la comisión de la infracción e imponga al responsable la sanción que corresponda, el Director Ejecutivo interino de la ANH, ordenará también el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias o contractuales infringidas.

POR TANTO:

El Director Jurídico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por delegación del Director Ejecutivo Interino mediante Resolución Administrativa ANH N° 1303/2011 de 29 de agosto de 2011 así como, de conformidad con lo señalado por el inc. b) del Artículo 80 del Decreto Supremo No. 27172 de 15 de septiembre de 2003, en nombre y representación del Estado Boliviano,

RESUELVE:

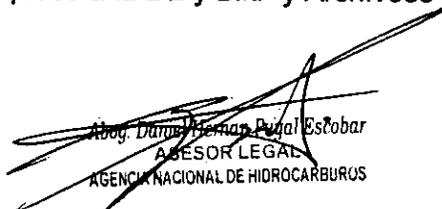
PRIMERO.- Declarar **PROBADO** el cargo formulado mediante Auto de fecha 01 de junio de 2011, contra la Empresa Estación de Servicio de Combustibles Líquidos "Isabel Chávez" ubicada en el Km. 09 de la carretera a Santa Cruz del departamento de Cochabamba, por ser responsable de no operar el sistema de acuerdo a las normas y dispositivos de seguridad, conducta contravencional que se encuentra prevista y sancionada en el inciso b) del Artículo 68 del Reglamento.

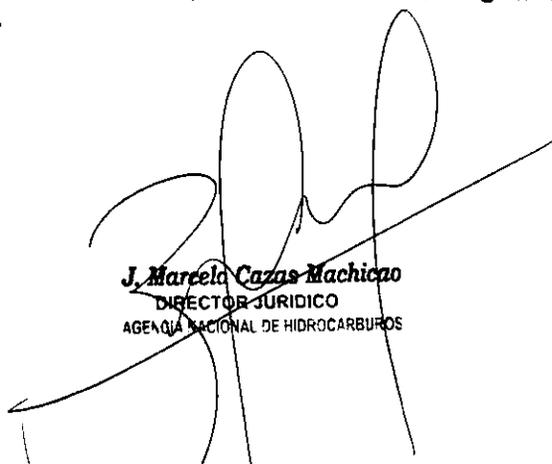
SEGUNDO.- Instruir a la Estación, la inmediata aplicación del Reglamento y la obligación de operar el sistema de acuerdo a las normas y dispositivos de seguridad, debiendo incorporar y conservar vigente para ello, un extintor en su cisterna de transporte de combustibles, en forma continua y preventiva y en resguardo de los operarios, usuarios y población en general.

TERCERO.- Imponer a la Estación, una multa de Bs. 3.122,23 (Tres Mil Ciento Veinte y Dos 23/100 Bolivianos), equivalente a un (1) día de comisión de ventas, calculado sobre el volumen comercializado el mes de junio de 2010, misma que deberá ser depositada por la Estación a favor de la ANH, en la cuenta de "ANH Multas y Sanciones" N° 10000004678162 del Banco Unión, dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, computables a partir del día siguiente hábil de su notificación con la presente Resolución, bajo apercibimiento de aplicársele lo determinado en el Artículo 15 del Decreto Supremo N° 29158 de 13 de junio de 2007.

CUARTO.- La Estación deberá presentar ante la ANH el depósito bancario que evidencie el cumplimiento de la sanción impuesta, bajo apercibimiento de tenerlo por no cancelado.

Notifíquese con la presente Resolución Administrativa a la Estación en el domicilio procesal ubicado en la Av. Ramón Rivero esq. General Jorge Ayala, edificio Gusot, piso 6, oficina F y sea en la forma prevista por el inciso b) del Art. 13 del Decreto Supremo No. 27172, Regístrese, Comuníquese a la DE y DAF y Archívese en la DJ.


Abog. Daniel Hernán Peral Estobar
ABESOR LEGAL
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS


J. Marcela Casas Machicao
DIRECTOR JURIDICO
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS